

Santiago, treinta de junio de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°.- Que en este procedimiento ordinario por demanda de resolución de contrato con indemnización de perjuicios, seguido ante el Segundo Juzgado de Letras de Buin, bajo el Rol C-1750-2018, caratulado “*Jaime Gallardo Tapia con Comité Habitacional Esperanza Uno Valdivia de Paine*”, se ha ordenado dar cuenta de la admisibilidad del recurso de casación en el fondo deducido por la parte demandante, en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel, de veinte de mayo del presente año, que confirmó sin más la que acogió la excepción de prescripción extintiva opuesta por el demandado y, en consecuencia, rechazó la demanda.

2°.- Que el recurrente de nulidad sostiene que en la sentencia cuestionada se infringe lo dispuesto en los artículos 2492, 2514 y 2515 del Código Civil.

Afirma que el yerro jurídico se produce cuando los sentenciadores deciden acoger la excepción de prescripción opuesta por la demandada, y así rechazar la acción intentada, ya que la correcta inteligencia de las normas relativas a la prescripción no exige que medie la notificación de la demanda para que se entienda interrumpido el plazo, bastando solo con la presentación de la demanda. Agrega, en definitiva, que se daban todos los presupuestos para acoger la demanda interpuesta.

Concluye indicando que los vicios denunciados influyen de manera sustancial en lo dispositivo del fallo, por lo que pide que se invalide la sentencia recurrida y se dicte una de reemplazo que rechace la excepción de prescripción alegada y se acoja la demanda de resolución de contrato.

3°.- Que el artículo 772 N° 1 del Código de Procedimiento Civil sujeta el recurso de casación en el fondo a un requisito indispensable para su admisibilidad, como es que el escrito en que se interpone “exprese”, es decir, explicita en qué consiste -cómo se ha producido- el o los errores, siempre que estos sean de derecho.

4°.- Que la exigencia consignada en el motivo anterior obligaba al impugnante a explicar los contenidos materia de la controversia; así, recayendo aquella sobre la procedencia de la resolución contractual invocada, lo cierto es que quien recurre debió extender expresamente también la infracción de ley – al menos- al artículo 1489 del Código Civil, pues tal disposición consagra precisamente el fundamento legal de la acción interpuesta. En todos los casos, si el recurrente pretende rever la decisión que dispuso rechazar la acción deducida, debió denunciar como infringida la norma que, ante un eventual éxito del presente recurso, necesariamente debe ser aplicada.

Efectivamente, tal norma tiene el carácter de decisoria *litis*, pues sirvió de sustento a los juzgadores para establecer el estatuto aplicable; en estas



condiciones, al no venir desarrollado en el libelo de casación el quebrantamiento de la preceptiva sustantiva básica en comento, a saber, la ley que rige el conflicto jurídico y que ha tenido influencia sustancial en lo resolutivo de la sentencia cuya anulación se persigue, el presente recurso será denegado.

5°.- Que lo razonado lleva a concluir que el recurso de casación en el fondo no puede tener acogida por adolecer de manifiesta falta de fundamento.

Y de conformidad además a lo prevenido en los artículos 772 y 782 del Código de Procedimiento Civil, se **rechaza** el recurso de casación en el fondo, deducido por el abogado Andrés Jorquera Guerra, en representación de la parte demandante, en contra de la sentencia de veinte de mayo del año en curso, pronunciada por la Corte de Apelaciones de San Miguel.

Regístrese y devuélvase

N° 22.735-2025.-



Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Arturo Prado P., Mauricio Alonso Silva C., María Angélica Cecilia Repetto G., Mario Carroza E. y Abogado Integrante Raul Fuentes M. Santiago, treinta de junio de dos mil veinticinco.

En Santiago, a treinta de junio de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

